

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA INVARIABILIDAD TRIBUTARIA

Señora directora:

El artículo 33 del proyecto de “Reconstrucción Nacional” busca instaurar un mecanismo de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US\$ 50 millones. Aunque se presenta como una actualización del derogado DL 600, su contenido plantea una severa anomalía constitucional: el intento de una legislatura actual de “amarrar” a las futuras.

La propuesta faculta al Ejecutivo para suscribir contratos que blindan impuestos como el IVA o el royalty frente a cualquier modificación legal, sin intervención parlamentaria en la etapa de contratación. Esto no constituye una regulación tributaria ordinaria, sino una limitación contractual a la soberanía legislativa. Al comprometer el *ius tributandi* por un cuarto de siglo, se impide que los próximos cinco presidentes y congresos ejerzan las competencias que la Constitución les confiere.

Esta restricción vulnera el principio democrático y la soberanía nacional consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Constitución. Como se ha advertido con precisión por J. Correa Sutil, “los congresos muertos no pueden dejar amarrados a los congresos vivos”. Ninguna mayoría circunstancial tiene la potestad de enaje-

nar facultades soberanas a favor de actores privados mediante leyes ordinarias, eludiendo la deliberación y los quórum que exige un compromiso de esta envergadura.

Domingo Lovera,
Profesor UDP
Diego Pardo,
Profesor UAI

ENTRE EL RESPALDO Y EL RETROCESO

Señora directora:

Durante el reciente aniversario de Carabineros de Chile el presidente Kast aprovechó la instancia para reforzar su narrativa de apoyo irrestricto a las fuerzas de orden, mediante anuncios que han tensionado el debate público.

Parte de las medidas responde a deudas históricas. El apoyo a familias de mártires y una nueva asignación buscan fortalecer el alma de la institución y retener personal en un contexto de fuga de talento. Sin embargo, el giro hacia la justicia militar para actos de servicio abre cuestionamientos. Aunque se argumenta mayor certeza jurídica, excluir al Ministerio Público puede debilitar estándares de derechos humanos, control civil y legitimidad, pilares de cualquier democracia moderna.